

Santiago, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

A folio 1, con fecha 17 de diciembre de 2021 comparece Ulises Marcelo Cerda Pecarevic, abogado, en representación de Blanco y Negro S.A., e interpone reclamo de ilegalidad en contra de la Resolución Exenta N° 1720 de 26 de noviembre de 2021, notificada el 03 de diciembre del mismo año, emanada de la Delegación Presidencial Regional de la Región Metropolitana, y solicita se declare el decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio por el cual se sancionó a la reclamante al pago de una multa de 529 U.T.M., esto por hechos ocurridos el 02 de octubre de 2016, en el contexto de un encuentro de fútbol disputado entre los clubes Colo Colo y Universidad de Chile.

Contextualiza que los hechos que son objeto de sanción que se reclama su decaimiento, acaecieron el 02 de octubre de 2016, los cuales fueron denunciados el 20 del mismo mes, realizando los descargos la reclamante el 05 de diciembre de 2016. Además, que la resolución respecto de la cual se recurre, fue emitida el 26 de noviembre de 2021 y notificada el 03 de diciembre de 2021. Por lo anterior, alega que desde el inicio del procedimiento y hasta la dictación de la respectiva sentencia han transcurrido cinco años.

Fundamenta que conforme a lo expuesto, el plazo de duración del procedimiento administrativo ha sido superior a los 4 años y medio, superando el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880, no encontrándose justificado por caso fortuito o fuerza mayor. Siendo procedente la aplicación de la institución del decaimiento del procedimiento administrativo, reconocido como una sanción a los órganos de la administración. Cita al respecto, el fallo Rol N° 6812-2015 de la Excma. Corte Suprema.

En segundo lugar, argumenta que se han infringido justamente los principios que el artículo 27 de la Ley N° 19.880 pretende tutelar, que serían los de impulso de oficio del procedimiento y celeridad, consagrados en el artículo 8 de la Ley N° 18.575 y el artículo 7 del



primer cuerpo normativo citado en este párrafo; el principio de eficiencia y eficacia, consagrado en el artículo 3 de la Ley N° 18.575; y el principio de responsabilidad que recae sobre todos los órganos de la administración, el cual sería consecuencia de lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Política de la República.

En último término, indica, que también es atinente al caso la garantía de debido proceso, aplicable a los procedimientos sancionatorios, en tanto se resguarda el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, o de plazo razonable.

Finaliza solicitando, se acoja y declare la ilegalidad de la Resolución Exenta N° 1720 de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, dejándola sin efecto, en razón del decaimiento del procedimiento del acto administrativo.

A folio 6 evacuó el informe doña Ruth Israel López, procuradora Fiscal del Consejo de Defensa del Estado, y por la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana de Santiago. En primer lugar contextualiza los hechos que motivaron la determinación de la sanción de multa de 529 U.T.M. a la reclamante, por los hechos ocurridos el 02 de octubre de 2016, y luego resume la alegación de decaimiento que inicia esta causa.

Fundamenta, luego, que no existe ilegalidad o vulneraciones en el actuar de la reclamada, la cual sustanció el procedimiento y sanción conforme a la Ley N° 19.327 y la Ley N° 19.880. En concreto, sostiene, que el solo transcurso del tiempo no da cuenta de un cambio de las circunstancias que condujeron a la determinación de la sanción, y que las normas del primer cuerpo normativo citado en este párrafo siguen vigentes.

Afirma, por otro lado, que la reclamante no desvirtuó los cargos que se sostuvieron en su contra, y que fueron la base para la imposición de la sanción establecida en el artículo 25 de la Ley N° 19.327.

Argumenta, en segundo lugar, que es improcedente la alegación de decaimiento del acto administrativo. En primer término, porque no



existe vulneración de un precepto o requisito legal durante la substanciación del procedimiento, que es justamente el objeto del recurso de ilegalidad.

En segundo término, que el decaimiento del acto administrativo presupone la desaparición de los presupuestos de hecho o de derecho que motivaron a la administración a emitirlo, lo cual no es sino una inexistencia sobreviniente. Ahonda que los requisitos del decaimiento son: a) que exista un acto administrativo esencialmente terminal, pues lo que trata de resolver el decaimiento son los efectos que ocurren tras la dictación y; b) que concorra una circunstancia sobreviniente, que puede ser de tres tipos: (i) de carácter fáctico que afecta la existencia del supuesto de hecho que habilita para la dictación del acto; (ii) que afecte al objeto sobre el cual produce sus efectos el acto administrativo; (iii) de carácter jurídico, es decir, una alteración sobrevenida a la regulación de los efectos del acto, sea que la derogue o que lo modifique sustantivamente. Y que no concurriría en la especie ninguno de los requisitos, sobre todo no se da el supuesto de dilación excesiva, la cual debe ser esencial, lo cual significa que deja en indefensión al interesado, o que por lo menos le produce menoscabo.

Finalmente, señala que el artículo 27 de la Ley N° 19.880, que sustentaría la reclamación, no establece un plazo de carácter fatal.

Pide, se rechace el reclamo de ilegalidad en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el reclamo de ilegalidad que contempla la Ley N° 19327 que regula los derechos y deberes de los espectáculos de fútbol profesional indica en su artículo 26.- *“Las infracciones señaladas en el artículo anterior serán conocidas y sancionadas fundadamente por la autoridad encargada de aprobar la realización del espectáculo de fútbol profesional, a través del procedimiento señalado en la ley N°19.880, con la excepción de lo expresado en los artículos 59 y 60*



de ese cuerpo legal, en lo relativo al recurso jerárquico y al recurso extraordinario de revisión.

Sin perjuicio de lo anterior, los afectados por las decisiones administrativas de la autoridad encargada de aprobar la realización del espectáculo de fútbol profesional podrán reclamar la ilegalidad de esa decisión a la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de los quince días corridos contados desde la notificación a que se refiere el artículo 46 de la ley N°19.880.

La Corte de Apelaciones deberá disponer que el reclamo de ilegalidad sea notificado por cédula al intendente, el que dispondrá del plazo de diez días para presentar sus descargos u observaciones. Evacuado el traslado por el intendente, o vencido el plazo de que dispone para formular observaciones, el tribunal ordenará traer los autos en relación.

La Corte de Apelaciones escuchará los alegatos de las partes, a solicitud de ellas, y dictará sentencia dentro del término de diez días, contado desde la fecha en que se celebre la audiencia antes referida.

Segundo: Que no es un hecho discutido por las partes que:

a) Por Resolución Exenta N° 1720 de 26 de noviembre de 2021 se sancionó por incumplimiento de las obligaciones señaladas en los artículos 3° letra a) de la Ley N° 19327 en relación al artículo 7 y numeral 4 letra d) y e) de la Resolución Exenta N° 1985 de fecha 30.09.2016, que autorizó el espectáculo deportivo profesional, al organizador de espectáculos de fútbol profesional Blanco y Negro S.A, imponiendo el pago de una multa de \$529 Unidades Tributarias Mensuales.

b) Que el sumario administrativo se inició por denuncia de fecha el 20 de octubre de 2016 que recibió la Delegación Presidencial Metropolitana del Jefe del Departamento Estadio Seguro en contra de Blanco y Negro S.A, respecto de un partido de fútbol que se desarrolló el día sábado 2 de octubre del año 2016 entre el Club deportivo Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental, por fallas en medidas de seguridad como la introducción de variados elementos



prohibidos que pueden afectar a los espectadores, y el escalamiento por las estructuras dentro del estadio para instalación de lienzos o cambiarse de lugar dentro del estadio.

c) Por Resolución Exenta N° 2248 de 8 de noviembre de 2016 se inició sumario bajo el expediente Rol IRM 08-2016.

d) Con fecha 5 de diciembre de 2016 el organizador evacuó sus descargos, exponiendo sus argumentos de defensa, abriéndose un período probatorio de 10 días hábiles los que se cumplieron el día 13 de enero del año 2017, ampliándose el plazo hasta el 17 del mismo mes y año, rindiéndose dentro de dicho plazo, la prueba que se registra en el sumario administrativo, como fue testimonial y documental.

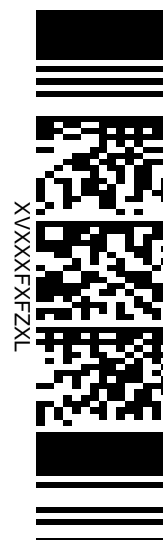
e) Que luego de rendida la prueba, se dictó la Resolución reclamada con fecha 26 de noviembre de 2021.

Tercero: Que la principal alegación del recurrente es el decaimiento del procedimiento administrativo fundado en la demora excesiva que se observa entre la denuncia, la rendición de la prueba y la resolución final. Expone que se han superado con creces los plazos de seis meses que contempla el procedimiento administrativo sin justificarse por parte de la autoridad administrativa, caso fortuito o fuerza mayor, por lo que la sanción debe ser dejada sin efecto por decaimiento del proceso sancionador.

Cuarto: Que el artículo 27 de la Ley N° 19880 postula que *“Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”*.

Se suma a lo anterior lo que señala Artículo 7º. *Principio de celeridad. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.*

Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y



removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

A su vez indica el artículo 8º. Principio conclusivo. *Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad.*

Por último la ley de Bases de la Administración del Estado señala en el artículo 8º.- *“Los órganos de la Administración del Estado actuarán por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, o a petición de parte Cuando la ley lo exija expresamente o se haga uso del derecho de petición o reclamo, procurando la simplificación y rapidez de los trámites.*

Los procedimientos administrativos deberán ser ágiles y expeditos, sin más formalidades que las que establezcan las leyes y reglamentos.”

Quinto: Que bajo tal prisma debe analizarse el sumario sancionador al organizador del evento deportivo, pues debe acreditar el ente público si la demora lo fue por alguna situación de caso fortuito o fuerza mayor, toda vez que si bien lo plazos no son fatales, es un derecho de los sumariados o investigados a ser juzgados en un plazo razonable de lo que no escapa la entidad administrativa, en este caso, la Delegación Presidencial Metropolitana.

En efecto, esta Corte debe en consecuencia revisar -previo al análisis de la cuestión de fondo de lo decidido en el sumario administrativo-, si se cumplió con el deber de resolver dentro de un plazo razonable, y si la demora excesiva tuvo algún fundamento plausible que llevara a concluir el sumario a más de cinco años desde la comisión de los hechos, perdiendo el objetivo de un proceso de esta naturaleza, cual es la situación al interior de los estadios al realizarse eventos deportivos, consagrados en la Ley que establece los derechos y deberes de los espectáculos de futbol profesional lo que permite estimar que una tramitación en exceso lenta desvirtúa el efecto



persuasivo de la sanción administrativa, por haberse dictado años después de ocurrido los hechos.

Sexto: Que si bien los plazos de la administración no son fatales y el vencimiento del plazo no conlleva de suyo la caducidad o invalidación, lo cierto es que deben revisarse las situaciones que puedan justificar una dilación en la tramitación de una causa -sin mayor complejidad pues desde la rendición de la prueba testimonial y aportación de documentos al sumario- nada más obra en el proceso administrativo, por lo que no se advierte motivo para resolver cinco años después de ocurrido los hechos, sin que pueda ni siquiera considerarse la situación de pandemia, pues entre el vencimiento del término probatorio y el inicio de las restricciones sanitarias corrieron tres años de inactividad en el proceso, la que se mantuvo hasta la decisión final.

Séptimo: Que siguiendo la jurisprudencia del máximo tribunal el decaimiento del procedimiento administrativo, esto es su extinción y pérdida de eficacia, no es sino el efecto jurídico provocado por su dilación indebida e injustificada en abierta vulneración a diversos principios del derecho administrativo obligatorios para la Administración, lo que tiene consagración legislativa, a saber eficiencia, eficacia y celeridad que se relacionan con la oportunidad en que se realizan las actuaciones administrativas, concluyendo el más alto tribunal, que el efecto jurídico de la violación de los mencionados principios *“no puede ser otro que una especie de decaimiento del procedimiento administrativo sancionatorio, esto es, su extinción y pérdida de eficacia”*, definiéndose decaimiento como la extinción de un acto administrativo provocada por circunstancias sobrevinientes de hecho o de derecho que afectan su contenido jurídico, tornándolo inútil o abiertamente ilegítimo.

Sostiene la Corte Suprema en esta materia que en la búsqueda de un criterio rector para dar por establecido el decaimiento del procedimiento administrativo por el transcurso del tiempo, habrá de estarse a los plazos que el Derecho Administrativo contempla para



situaciones que puedan asimilarse. En este sentido, se ha acudido a lo dispuesto en el artículo 53 inciso primero de la Ley N° 19.880, precepto que fija a la Administración un plazo de dos años para invalidar sus actos administrativos por razones de legalidad. De manera que constatando en un procedimiento administrativo una inactividad que alcance el término de dos años, se produce su decaimiento y la extinción del acto administrativo sancionador. (CS Rol N° 6812-15)

Octavo: Que, en consecuencia, quedando asentado que se vulneraron los principios de eficiencia y eficacia lo que se observa al dejar pasar cinco años para sancionar conductas por los hechos ocurridos en octubre del año 2016 al interior de un estadio de fútbol, sin que la administración haya demostrado o explicado la demora demuestra una ineficiencia en el uso de recursos públicos para la realización de su actividad como es tramitar un sumario administrativo dentro de un plazo razonable.

Por lo demás y tal como se señaló en la causa Rol 85-2019 de la Corte de Apelaciones de Valparaíso con la conducta de la administración, se afecta el logro de los objetivos que tuvo en vista el legislador al establecer los deberes y derechos relacionados con los espectáculos de fútbol profesional y prever las sanciones para las infracciones cometidas por los organizadores de esos espectáculos, cuando, por causas atribuibles a la autoridad llamada a incoar el respectivo procedimiento, se adoptan, en este caso, la resolución final cinco años después de ocurridos los hechos.

Noveno: Así las cosas, no se ha respetado la garantía del debido proceso, en cuanto al plazo en que debe tramitarse todo procedimiento sancionador, configurándose en la especie las circunstancias del decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, lo que vicia de ilegalidad la Resolución Exenta N° 1720 de 26 de noviembre del año 2021 emanada de la Delegación Presidencial Metropolitana, por lo que el reclamo será acogido.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 19327, **se acoge**, sin costas, el reclamo de ilegalidad interpuesto a folio 1 por



Blanco y Negro S.A en contra de la Resolución Exenta N°1720 de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Delegación Presidencial Regional Metropolitana de Santiago, la que se declara ilegal y por ende se la deja sin efecto.

Redacción de la ministra suplente Zúñiga Alvayay.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 627-2021. Contencioso- administrativo.



Pronunciado por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia Lopez M., Ministra Suplente Isabel Margarita Zuñiga A. y Abogada Integrante Maria Fernanda Vasquez P. Santiago, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

